



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN CT/SE/22/2022

En Mexicali, Baja California, siendo las nueve horas del día dieciocho de abril de dos mil veintidós, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el Magistrado Nelson Alonso Kim Salas, el Consejero de la Judicatura, Lic. Francisco Javier Mercado Flores, la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, C.P. Rosaura Zamora Robles, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial, Lic. Santiago Romero Osorio y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria CT/SE/22/2022.

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con la lista de asistencia de todos los integrantes del Comité, al Magistrado Presidente, quien declara la existencia de quórum legal, por lo cual se inicia esta sesión conforme a los artículos 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 39 y 42 del Reglamento de la Ley citada. Acto continuo, sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del orden del día
Por unanimidad se aprobó en sus términos.
- II. Asuntos a tratar:

ÚNICO. Procedimiento de clasificación de la información solicitada como confidencial 10/2021, derivado de la respuesta otorgada por la Directora de la Unidad de Transparencia, a la solicitud de acceso a la información 020058422000131, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

Visto el proyecto de resolución presentado por la Secretaria Técnica, se puso a discusión el asunto y con las facultades que se le confieren al Comité, en las fracciones I y II del artículo 54, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California; 8 y 11 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, se determina aprobarlo por sus propios y legales fundamentos y como consecuencia, **habrá de confirmarse la clasificación de la información solicitada como confidencial**, tomando en cuenta los antecedentes y consideraciones siguientes:

1) Antecedente:

Mediante el registro del folio 020058422000131, en la Plataforma Nacional de Transparencia, el peticionario solicitó *"señalar el número de veces que la ciudadana [REDACTED] ha acudido a solicitar justicia de 2015 a la fecha"*. Así mismo solicitó *"Indicar en una tabla los asuntos por número de expediente y juzgado en la que aparezca (...) de 2015 a la fecha"*.

La Directora de la Unidad de Transparencia manifiesta en el oficio de respuesta fechado el día de hoy, número 0533/UT/2022, lo que a continuación se transcribe:

"Por este conducto y con relación a su solicitud registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 020058422000131, en fecha 29 de marzo del año en curso, me permito informarle que no es posible atender su petición, toda vez que lo solicitado no se encuentra dentro del marco de la Ley, por tratarse de la búsqueda de datos personales que implican el ámbito privado de particulares, no de gestión de autoridad, por lo que si los hubieren, entran en la categoría de datos personales de carácter confidencial.

En efecto, si bien es cierto que de conformidad a la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que se refiere al objeto de dicha Ley, y del que se infiere su marco normativo o regulación, se tiene la obligación de garantizar que toda persona tenga acceso a la información pública que se genere o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, también es cierto que el diverso numeral 171 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California, establece que a la información confidencial solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes o los servidores públicos facultados para ello.

La determinación anterior se fortalece al analizar lo dispuesto por el artículo 184 del Reglamento citado, pues en éste, se establece la obligación de buscar y proporcionar la información pública en poder de esta Institución, que no se encuentre reservada o sea confidencial. De lo que se desprende con meridiana claridad que no es obligación de este Sujeto Obligado, buscar información que concierne a los particulares usuarios del servicio de administración de justicia o que participan por cualquier motivo en los procesos o procedimientos el ámbito jurisdiccional.

Ahora bien, es importante señalar que el artículo 4 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, dispone que se entiende por datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, disposición que se amplía en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia que a la letra dice:

“Artículo 172. Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género; los referidos a características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, número de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etcétera...” , que en su caso, requeriría el consentimiento de su titular, para comunicarlos a terceros.

En virtud de lo anterior, las constancias y los documentos que se contienen en los expedientes judiciales, ventilados a los juzgados que correspondan, a dichos expedientes, se refieren a la esfera privada de los particulares, cuyos asuntos son sometidos a la competencia de los órganos jurisdiccionales, para con ello realizar la función jurisdiccional.

Vistas así las cosas, y a mayor abundamiento, es de señalarse que la información solicitada no encuadra en el marco de la Ley de la materia, pues no existe hipótesis normativa de la que se desprenda la obligación de esta autoridad de realizar una búsqueda de los asuntos que se someten por los particulares contra otros particulares o solo para beneficio propio, a los órganos jurisdiccionales de este Poder Judicial, pues en observancia al artículo 3 de la Ley de la materia, del análisis de las hipótesis que lo conforman, se confirma que no se desprende la obligación de realizar una búsqueda de información que corresponde a la esfera privada de los particulares, sino transparentar la gestión pública, garantizando el acceso a la información pública, necesaria para una oportuna rendición de cuentas sobre los indicadores de gestión de esta Institución y el ejercicio de recursos públicos que nos son asignados o bien que sirva de base para la evaluación del desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial, más no gestiones de interés privado.

Me permito transcribir el multicitado artículo 3 de la Ley Estatal de Transparencia:

“Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto:

I. Desarrollar procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para garantizar que toda persona tenga **acceso a la información pública** que genere o se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en esta Ley.

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información completa y actualizada que generan, administran o posean los sujetos obligados.

III. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

IV. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a la ciudadanía, a través de la generación y publicación de información sobre su indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, de forma completa, veraz, oportuna, y comprensible.

V. Promover la generación y consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la ciudadanía y los servidores públicos.

- VI. Regular el proceso del recurso de revisión, el procedimiento de denuncia y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.
- VII. Regular las demás instituciones que se contienen en esta Ley”.

Igualmente cabe destacar en lo conducente, el artículo 16 en su fracción VI de la Ley citada establece lo siguiente:

Artículo 16. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

“ ...

VI.- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial

...”

Para su información, le comunico que los diversos preceptos normativos citados, los puede usted consultar en la dirección: <https://www.pjbc.gob.mx/LeyesYReglamentos.aspx>

3) Del acto de clasificación de la información solicitada.

Hecho el análisis del caso concreto, este Comité estima que le asiste la razón a la Titular de la Unidad de Transparencia, pues conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la **información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica que la identifica o hace identificable como lo es el número de expediente** pues es un dato que corresponde y relaciona a las personas o partes legítimamente interesadas en un proceso judicial, que a juicio de esta autoridad, debe ser protegido de terceros no autorizados.

A mayor abundamiento, debemos recordar que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Constitución **distingue dos tipos de información**: aquella referida en la fracción I del apartado A del artículo 6to. Constitucional, que se denomina **información pública** y está referida a toda aquella que está en posesión de cualquier autoridad, entidades, órganos, organismos y de los Poderes del Estado e incluso a cualquier persona

física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad y por otro lado, está la información que se refiere a la vida privada y los datos personales.

En la primera categoría está incluido todo aquel documento que dé cuenta de las actividades desarrolladas por los entes del estado en ejercicio de sus funciones y que, entre otras cuestiones pueda transparentar la gestión pública, así como favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de las autoridades. Dicha información solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

En la segunda categoría se ubica la información de los particulares, que el estado posee derivado de la natural interacción entre gobernantes y gobernados; esto es, se trata de información relacionada a diversos fines -tributarios, administrativos, mercantiles, de relaciones familiares, entre otros- que el estado posee para el mejor desarrollo de sus atribuciones. Dicha información será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

En materia de transparencia y acceso a la información, toda actuación judicial que compone un expediente judicial es pública, por regla general y en todos los casos las actuaciones judiciales admiten ser divulgadas en versión pública, en las que se suprima la información confidencial o reservada de los datos personales que en ellas obren.

En el caso concreto no se trata de transparentar y dar acceso a actuaciones judiciales, sino que se divulgue información que pertenece a la esfera privada de las partes de un proceso judicial.

Vistas así las cosas, se reitera, no se trata de conocer sobre la actividad propia de este sujeto obligado en su función de impartir justicia, sino conocer datos relacionados a la vida privada de persona determinada ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de

Baja California, motivo por el cual, esta autoridad debe proteger y tutelar ese espacio de la vida privada de los particulares y no está obligada a realizar una búsqueda requerida por un tercero extraño a los intereses legítimos de las partes en un juicio jurisdiccional; esto es, un tercero no autorizado. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California que reza: ***“la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrá tener acceso a ella, los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello”*** y en el 184 del ordenamiento citado, que dispone: ***“Es obligación de los servidores públicos, buscar y proporcionar la información pública, que no se encuentre reservada o sea confidencial”***.

Para el acto de clasificación, cabe destacar que si bien es cierto que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, **toda información** generada, administrada, adquirida, transformada o en posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es **pública**, también lo es que ésta puede ser **negada a terceros**, mediante un acto **debidamente fundado y motivado** que la clasifique como **confidencial** y por ende, **restringida al público**.

Por otro lado, considerando que en el caso concreto, el acto de clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se exige además de la exposición de **los motivos que la justifiquen, aplicar la prueba de daño**, lo que implica en este caso, precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información solicitada **y por otra, determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico**, a lo que la doctrina ha denominado la prueba de daño.

Para efectos de lo anterior, en el caso concreto, para el acto de clasificación de la información solicitada como confidencial, encontramos como normatividad aplicable la

siguiente: Artículos 4, fracciones VI, y XII, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California; 171, 172, 175, 176, 177 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

De dicha normatividad se desprende, sin necesidad de interpretación, que la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina si la información en su poder, encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

Para dicha determinación, **es necesario conocer la naturaleza de la información requerida**, en el caso que nos ocupa, **se solicita que se indique el número de expediente de un asunto de persona física determinada; esto es, si en el Poder Judicial existe registrado un juicio en el que sea parte**, que como ya quedó asentado, se trata de un dato de carácter personal, atendiendo lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia que considera entre los datos personales, la **información numérica**, concerniente a una **persona física o jurídica identificada o identificable** y; en este caso, el número del expediente es el dato personal que se relaciona e identifica a las personas o partes legítimamente interesadas en un proceso judicial, que a juicio de esta autoridad, debe ser protegido de terceros no autorizados.

Para reforzar la afirmación anterior, cabe citar el documento publicado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información titulado "Metodología de Análisis de Riesgo BAA", que en su página 3, se reflexiona sobre la necesidad de **realizar una clasificación de los datos personales en función de tales variables que se presentan dentro de un análisis de riesgo** y clasifica a los datos personales en 4 categorías de acuerdo con la criticidad de los mismos y dentro de los datos de riesgo inherente medio, contempla entre otros los datos que permiten inferir el **patrimonio** de una persona, **datos de autenticación** y los **datos jurídicos**, tales como: antecedentes penales, amparos, demandas, contratos, litigios

y cualquier tipo de información relativa a una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa. Información que sin duda, pertenece a la esfera jurídica privada de los particulares y, para que pueda ser comunicada a terceros, requiere del consentimiento de sus titulares, según se dispone en el artículo 176 del Reglamento de la Ley local de la materia, lo cual se justifica atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información confidencial o aquella clasificada como reservada, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, considerando que es innegable, que la divulgación de estos datos representa un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de los particulares, ya que se trata de información que no es de interés general, sino que se comprende dentro de los denominados datos personales que de acuerdo a la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, **información de carácter confidencial**, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la que en su artículo 4, fracción XII, establece que se entenderá por información confidencial: *"La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; (...) por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley"*, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 172, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra reza: *"Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, (...) "*

Es importante seguir reiterando en este apartado lo establecido en el diverso numeral 171 del Reglamento referido, de lo cual se desprende con meridiana claridad que los terceros no podrán tener acceso a la misma, salvo que cuenten con el consentimiento de sus titulares, como ya quedo señalado, lo que en el caso no sucede.

3) **De la prueba de daño.** Atendiendo a los diversos numerales 175 y 177 del Reglamento de la Ley estatal de la materia, considerando que la clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, se procede a la exposición de los motivos que la justifiquen, mediante la aplicación de la prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la ya citada Ley estatal, el Reglamento de la Ley local de Transparencia, los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables.

En primer lugar, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que **se entenderá por "Prueba de daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla"**.

Así las cosas y, dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona un bien jurídico tutelado por tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización de los titulares de los mismos, para su entrega o divulgación, la información de interés del peticionario debe clasificarse como confidencial y restringir su acceso.**

Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado se debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley de transparencia estatal, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe

decir que liberar la información relacionada a los juicios en los que una persona física determinada es parte, identificando el número de expediente asignado a su caso y como consecuencia el "juzgado en que aparezca", que se lleva a cabo en este Poder Judicial, representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la privacidad de los particulares; II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que el daño que se pudiese causar a los particulares al divulgar sus datos personales de carácter jurídico, supera el interés público de que se conozcan, ya que no se puede suponer ningún interés público de liberarse, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento necesario de su titular para la liberación de sus datos; III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. La negativa o limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la privacidad e intimidad de los particulares y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.

4) De la aprobación del acto de clasificación. En virtud de lo fundado y motivado en los apartados anteriores, los integrantes del Comité, por unanimidad **ACUERDAN: Aprobar la clasificación de confidencialidad de los números de expedientes judiciales de personas físicas determinadas y por ende del órgano jurisdiccional ante el cual están radicados, datos de carácter jurídico de los particulares que intervienen en procesos y procedimientos judiciales.**

Notifíquese y entréguese copia de esta acta al peticionario por conducto de la Unidad de Transparencia. Estando presente la Titular de la Unidad de Transparencia, se da por notificada de esta resolución.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos del día dieciocho de abril de 2022.



MAGISTRADO ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO NELSON ALONSO KIM SALAS
Adscrito a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia



LIC. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES
Consejero de la Judicatura del Estado



C.P. ROSAURA ZAMORA ROBLÉS
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura



LIC. SANTIAGO ROMERO OSORIO
Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna

M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité

Firma electrónica con fundamento en los artículos 1 fracciones I y II, 2, 3 fracciones I, II, XIX, XX, XXV y XXX, 4 fracciones I y II, 12 y 13, del Reglamento para el Uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Baja California

Hoja de Evidencias Criptográficas

Archivo Firmado: F33_1035117.pdf

Proceso de Firma: 3815228

Autoridad Certificadora: AC del Poder Judicial del Estado de Baja California

Nombre:	ELSA AMALIA KULJACHA LERMA	Serie:	000000000000000007260
Fecha y Hora:	2022-04-18T10:35:13-07:00	Secuencia:	10717054
55 0a 35 77 25 75 a2 32 16 5f a9 11 a6 3a e1 02 24 50 49 b1 5c 6d 36 3f df 42 e4 b0 49 3a a1 fe 50 3b 88 37 bb 71 56 3e 67 87 5f eb f8 83 32 b4 fc 4d c8 5f 4d 1c 99 a0 61 5a ff b3 61 dd 09 04 17 e9 66 47 9a 77 30 da fa 6e 68 a3 0d 96 3b d1 d9 d3 5b 5a 02 8f 76 f2 96 c6 0d 2c 3d 3a 95 24 1c fc f7 d3 bf 89 eb b2 e5 20 dc ed e1 a3 9c f2 1f 32 12 d0 8a 50 85 26 70 df 20 16 12 2c 69 94 0f fe d6 8a 95 c0 76 0f df 97 fb 8d c7 19 8d e0 b8 f7 a9 7f fe 7d f8 fc b6 c2 5f 05 23 f8 87 fb e4 3b 6d 87 20 5a b8 67 18 b5 b4 28 01 4e de e6 29 d8 49 a9 60 8a 30 a7 91 db 6b 90 e6 2b 21 ce af a3 32 18 77 a7 d9 67 b1 23 51 bc b5 c6 77 eb 4a 34 17 26 9a 57 40 f8 da 63 3d 56 2c aa 2e 8b 43 98 bd 74 b5 7a 02 fe e6 79 13 b2 7d a6 53 e2 7b 8f 45 e9 55 79 70 31 35 e3 ee 51 cd 03 58 8c			
Datos estampillados:	8DC2D97742A062E6F773619ECA7197DD80EF5E83E01F684422A81E1E9442AFA2		



FIRMADO POR:
- ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
PROCESO DE FIRMA, 3815228

La validez de este documento puede ser verificada en la siguiente página

<https://tribunalelectronico.pjbc.gob.mx/Firma/validacion>

8DC2D97742A062E6F773619ECA7197DD80EF5E83E01F684422A81E1E9442AFA2